

REPÚBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

AUTO INTERLOCUTORIO 31

Santiago de Cali, 26 de septiembre de 2023

(Aprobado mediante Acta del 14 de julio de 2023)

Proceso	Ordinario
Radicado	76001310501420130002301
Demandante	Edwin Alberto Marulanda Vidal
Demandado	Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otro
Temas	Práctica de prueba
Decisión	Revoca

En Santiago de Cali el día 26 de septiembre de 2023, la Sala Quinta de Decisión Laboral conformada por los Magistrados **María Isabel Arango Secker, Carolina Montoya Londoño y Fabian Marcelo Chavez Niño**, quien actúa como ponente, obrando de conformidad con la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se modificó el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, procedemos a resolver el recurso de apelación en contra de lo decidido en el Auto 1580 del 30 de abril de 2018, proferido dentro del proceso ordinario promovido por **Edwin Alberto Marulanda Vidal** contra **Junta Nacional de Calificación de Invalidez y otro**.

ANTECEDENTES

Para empezar, pretende el demandante que se declare que padece una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, en consecuencia, que se declare la nulidad del dictamen No. 1049728 del 27 de julio de 2011 y en su lugar, se acoja el dictamen que disponga el juez previo concepto médico,

que se ordene a Seguros de Vida Colpatria S.A., que reconozca la pensión de invalidez de origen profesional a partir del 27 de julio de 2010 y que se condene en costas procesales.

Ahora bien, para lo que interesa al recurso objeto de estudio, una vez revisado el expediente, se evidencia que el juez de conocimiento profirió el Auto 1580 del 30 de abril de 2018, a través del cual, luego de hacer un bosquejo sobre lo dispuesto en el artículo 228 del Código General del Proceso, dispuso que al no haberse procedido conforme lo establece la norma en cita, era procedente decidir la litis con el material probatorio recaudado e incorporado al expediente.

La anterior decisión causó inconformismo para la apoderada de la parte activa, quien presentó recurso de reposición y en subsidio apelación bajo el argumento de que lo manifestado por el juez de primera instancia carece de veracidad, pues considera que no se actuó contrario a la norma, que se aportó escrito con observaciones y además de ello, un dictamen nuevo en oposición al presentado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, dentro del término de traslado, esto es, el 20 de noviembre de 2017.

Por su lado, el Juez de primer grado, mediante Auto 1513 del 16 de septiembre de 2019, declaró la improcedencia del recurso de reposición y concedió el de apelación.

Con fundamento en lo anterior, se resolverá conforme a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Esta Corporación es competente para asumir el conocimiento del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el Auto 1580 del 30 de abril de 2018, proferido conforme el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, que contempla taxativamente los autos susceptibles de recurso de apelación y en su numeral 4° señala el proveído que niega el decreto o la práctica de una prueba, lo que hace procedente el estudio del recurso formulado.

Para lo relevante a la Sala, es claro que en el presente caso la parte demandante centra su inconformidad en que no es cierto el argumento dado por el juez de primer grado, cuando indicó que al no proceder conforme al artículo 228 del Código General del Proceso, se continuaría con el trámite del proceso, con las pruebas que se encontraban ya incorporadas en el expediente.

Para mayor ilustración, al revisar las actuaciones dentro del trámite del proceso se advierte que, el juez de primera instancia en audiencia celebrada el 17 de mayo de 2016 profirió el Auto 2088 a través del cual decretó la prueba pericial y dispuso la remisión del actor a la Junta Regional de Calificación de Risaralda, para que emitiera un nuevo dictamen y así poder definir la pérdida de capacidad laboral.

Una vez surtida esta etapa, luego de que la mencionada junta emitiera el dictamen 10497282-901 del 5 de diciembre de 2016 (f.º 324-326), el juzgado mediante Auto 1095 del 1 de marzo de 2017 corrió traslado a las partes para que presentaran las respectivas observaciones al dictamen (contradicción), en este punto es preciso advertir que el término del traslado vencía el 7 del mismo mes y año, data para la cual, la apoderada judicial de la parte demandante presentó escrito mediante el que dice erró la entidad al mencionar que Marulanda Vidal no cuenta con la presencia de episodios convulsivos debidamente sustentados, situación que soportó al plasmar lo dispuesto en las historias clínicas del actor, además, advirtió que recibe tratamiento para ello con Carbamazepina 3 veces al día, por lo que considera que depende de él, esto, para que no se generen mayores secuelas en su condición de salud, entre otros argumentos, con los que pretende contradecir el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Risaralda.

El juez de primer grado profirió el Auto 3234 del 10 de julio de 2017 a través del cual se ofició a la Junta Regional de Calificación de Risaralda para que emitiera un pronunciamiento a las solicitudes realizadas por la parte actora, entidad que, mediante oficio del 11 de octubre de 2017, respondió al escrito radicado por la apoderada judicial del demandante (f.º 353). Asimismo, el juez de conocimiento emitió el Auto 4924 del 14 de noviembre del mismo año, a través del cual se puso en conocimiento a las partes el memorial presentado por la junta ya mencionada.

En respuesta a lo anterior, se observa que la apoderada de la parte actora presentó el mismo escrito que radicó en su momento para controvertir el dictamen, que, aunque en el asunto se plasmó que era para “*complementación de dictamen*”, no se podría llegar al punto del exceso ritual manifiesto y negar la petición por el sólo hecho de no haberla titulado adecuadamente, pues de su lectura se extrae sin mayor esfuerzo que lo que realmente se busca con ese escrito es controvertir el dictamen del 5 de diciembre de 2016 (f.º 355-368). Además, de esto, aportó un dictamen particular proferido por el Médico Laboral, Dr. Carlos Alberto Cardona e historia clínica del señor Marulanda Vidal (f.º 369 y s.s.), en aras de sustentar sus observaciones a la prueba pericial.

El juez de primera instancia profirió el Auto 1580 del 30 de abril de 2018, con el cual, luego de ilustrar sobre lo establecido en el artículo 228 del Código General del Proceso, dispuso que continuaría con el trámite del proceso con las pruebas que ya habían sido aportadas, al considerar que la parte actora no había procedido conforme lo establece la mentada norma.

Al respecto, se precisa que no se desconoce por esta colegiatura, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, el juez tiene dentro de su libertad y soberanía probatoria, autonomía para formar su convencimiento con los elementos de convicción que le ofrezcan mayor credibilidad.

Sin embargo, no encuentra esta Sala una decisión motivada, como lo exige la norma, para no tenerse en cuenta las observaciones u objeciones a la prueba pericial presentadas por la apoderada judicial de Marulanda Vidal, ello si se tiene en cuenta que conforme lo establece el artículo 228 del Código General del Proceso, se radicó el escrito en debida forma, dentro del término concedido, con los soportes documentales respectivos con los cuales se pretende controvertir el dictamen del 15 de diciembre de 2016.

Lo anterior, al considerar que al no tenerse presente lo controvertido por la parte que implora el derecho, se está violando *per se*, el derecho a la práctica de la prueba, independientemente de que el juez considere que ya cuenta con el material probatorio suficiente para decidir de fondo la litis, pues el fin último es quien, en cada caso particular, debe proceder de conformidad y en armonía con

todas las pruebas aportadas para que al momento de pronunciar su sentencia tenga mejores posibilidades de llegar a un fallo justo y conforme a derecho.

Aunado a lo anterior, el juez como director del proceso y conforme al principio de inmediación, es quien debe tener el contacto directo y real con la prueba bajo un esquema de audiencias en búsqueda de un material probatorio que reúna las características de utilidad, necesidad, pertinencia, pero, sobre todo, que sea fiable, certero, con el fin de encontrar la verdad real que lo lleve a tomar una decisión de fondo debidamente documentada.

Ello, sin que se pase por alto que lo que se busca en el presente proceso es, además, de la nulidad del dictamen proferido en el 2011, que se reconozca la pensión de invalidez, derecho que hace parte de la seguridad social y que se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Carta Política y, que debe ser garantizado por los operadores judiciales, avalando así el acceso a la administración de justicia.

Por lo que para esta Sala resulta indispensable tener certeza de la pérdida de capacidad laboral de Marulanda Vidal, sin que exista ningún tipo de duda frente a su condición de salud y esto sólo se logra permitiendo el derecho de contradicción y que previa valoración del conjunto de todas las pruebas, se emita una decisión de fondo ajustada a derecho.

Así las cosas, se revocará el Auto 1580 del 30 de abril de 2018, y en su lugar, se ordenará al juzgado de conocimiento que acceda a la incorporación de las objeciones presentadas por la parte activa junto con los soportes documentales allegados con el mismo, para que sean tenido en cuenta al momento de proferir la sentencia que ponga fin a la litis.

Sin condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Quinta de Decisión Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el Auto 1580 del 30 de abril de 2018, proferido por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, para en su lugar:

ORDENAR al juzgado de conocimiento que acceda a la incorporación de las objeciones presentadas por la parte activa junto con los soportes documentales allegados con el mismo, para que sean tenido en cuenta al momento de proferir la sentencia que ponga fin a la litis.

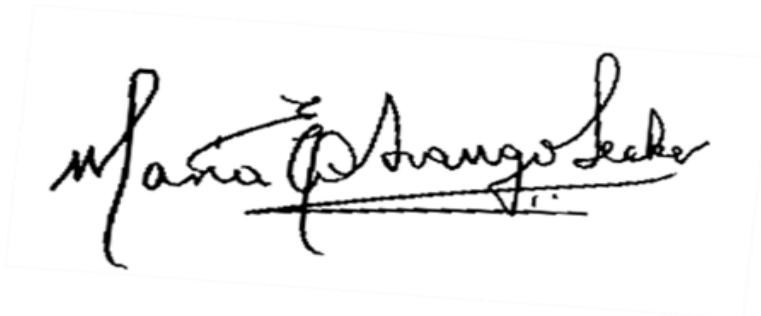
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de Origen.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS.



FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO
Magistrado



MARÍA ISABEL ARANGO SECKER
Magistrada



CAROLINA MONTOYA LONDOÑO
Magistrada